

SEPTIEMBRE 26 DE 1912

48.^a REUNION. CONTINUACION DE LA 18.^a SESION ORDINARIA

PRESIDENCIA DEL GRAL. ROSENDO M. FRAGA

Diputados presentes: Acosta, Agote, Albarracín, Alvear, Anchorena, Arancibia Rodríguez, Araya, Atencio, del Barco, Bas, Beltrán, Benegas, Bengolea, Bréard, Cafferata, Calderón, Cantilo, Carballido, Carbó, Carlés, Carranza, Castillo, Conforti, Coronado, Echegaray, Escobar, Etcheopar, Etcheverry, Frías, Funes, Galigniana Segura, Gallo, García González, Gómez (C. F.), Gonnet, González Bonorino, González Pérez, Jaramillo, Justo, Laurencena, Lavié, Leiva, Lezica, Linares, López, Lubary, Laro, Llobét, Massa, Méndez Casariego, Molina, Mora y Araujo, Moyano, Ordóñez, Padilla (M. M.), Palacios, Parera (F. M.), Parera (R. A.), Pastor, Pérez, Pesenti, Rolón, Rothe, Saavedra Lamas, Sanguier, Sánchez Viamonte, Santillán, Sobral, Tenreiro, de la Torre, Valdez, del Valle, de la Vega, Vergara.—**Ausentes con licencia:** Avalos, Drago, Loza, Serrey.—**Ausentes con aviso:** Arias, Arraga, Avellaneda, Berceche, Bonifacio, Cabanillas, Cárcano, Ceballos (A.), Celestia, Estrada, Frers, Gómez (J. R.), Guevara, Igarzábal, Lassaga, Leguizamón, Mariño, Oliver, Olmedo, Padilla (E. E.), Paz, Penna, Santamarina, Sempín, Varela, Zaballos (E. S.).—**Ausentes sin aviso:** Alvarez, Castañeda Vega, Fonrouge, Freyre, Mena, Moreno, Peña, Pinedo, Terán.

SUMARIO N.º 48

1	4
Comunicación del señor ministro de justicia e instrucción pública referente a su asistencia al seno de la honorable Cámara a efecto de contestar la interpelación votada en la sesión del 10 del corriente.	Indicación relativa al trámite de los asuntos presentados en secretaría.
2	5
Moción para reconsiderar preferentemente el despacho de la comisión de guerra en el proyecto de ley sobre asimilación militar de los maestros de gimnasia y esgrima del ejército.	Peticiones particulares.
3	6
Moción para reconsiderar preferentemente el despacho de la comisión de legislación en el proyecto de ley del señor diputado Belfor del Valle sobre modificación al Código penal.	Proyecto de ley del señor diputado Carlos F. Gómez autorizando al departamento ejecutivo de la municipalidad de la Capital para crear una oficina de arte público edilicio.
	7
	Proyecto de ley del señor diputado Luis Agote sobre disminución de los impuestos de importación a los artículos de imprenta.

8

Continúa y termina la consideración del despacho de la comisión de legislación en el proyecto de ley sobre organización del departamento nacional del trabajo.

9

Diversas mociones de preferencia.

10

Consideración del asunto a que se refiere el número 2.

11

Consideración del despacho de la comisión de agricultura en el proyecto de ley autorizando al Poder ejecutivo a rendquirir la propiedad de la isla de los Estados.

12

Diversas mociones de preferencia.

13

Consideración del despacho de la comisión de obras públicas en el proyecto de ley del señor diputado Mariano E. López, sobre ampliación del edificio de la sociedad «La Fraternidad», de Concepción del Uruguay.

En Buenos Aires, a 26 de septiembre de 1912, el señor presidente declara reabierta la sesión a las 4 y 10 p. m.

1

INTERPELACIÓN

Sr. Presidente — Pongo en conocimiento de la honorable Cámara que el señor ministro de justicia e instrucción pública ha hecho saber a la presidencia que se encuentra restablecido y, por consecuencia, en condiciones de acudir a la honorable Cámara en el momento que ella lo resuelva, para responder a la interpelación promovida por el señor diputado Justo.

Sr. Justo—Pido la palabra.

Propongo que se invite al señor ministro para la sesión de mañana, a los fines de la interpelación ya votada.

Sr. López—El sábado, señor diputado, para concluir con los asuntos que están en trámite.

Sr. Justo—Yo preferiría que la Cámara resolviera sobre mi indicación.

—Se vota si se invita al señor ministro de justicia e instrucción pública a concurrir a la sesión del viernes 27 del actual, a efecto de contestar la interpelación promovida por el señor diputado Justo, y resulta afirmativa.

2

MOCIÓN

Sr. Saavedra Lamas—Pido la palabra.

Hay un despacho de la comisión de guerra que se refiere a un asunto sumamente sencillo, que podría ser resuelto por la Cámara en brevísimo tiempo, en pocos minutos; y como la sesión de hoy está destinada al proyecto de ley sobre el departamento del trabajo, pediría que el proyecto a que hago indicación se tratara después de terminado éste.

Sr. Presidente—Hago presente a la honorable Cámara que hay otras preferencias ya establecidas.

Varios señores diputados—¿Qué asunto es el despachado por la comisión de guerra?

Sr. Saavedra Lamas—Un proyecto sobre asimilación de maestros de esgrima.

Sr. Presidente—Declarando asimilados militares a los profesores de esgrima del ejército.

—Apoyado.

Sr. Presidente—Se va a votar si se trata ese asunto una vez que se termine con el relativo al departamento del trabajo.

Sr. López—Después de los que tienen preferencia?

Sr. Saavedra Lamas—Exigiré sólo dos minutos, señor diputado.

Sr. López—Perfectamente.

—Se vota la moción del señor diputado Saavedra Lamas, y resulta afirmativa.

En el año 1905 la ciudad de Buenos Aires tenía una población de 1.025.653 almas, mientras que en agosto de este año los habitantes alcanzaban a 1.386.580, de manera que tampoco ha respondido el aumento en el número de imprentas a lo que lógicamente se podía esperar del de la población. Y es necesario tener en cuenta también que el comercio y las industrias del país se han triplicado o más en el transcurso de la última década, razón de más para poder decir que igual incremento debieron experimentar las imprentas para servir las necesidades de la economía nacional.

LA REDUCCIÓN DE LOS DERECHOS

Se impone, en primer término la rebaja de los derechos que gravan el papel para diarios. La tarifa castiga con 0.0212 oro cada kilogramo de papel, impuesto equivalente al 33 por ciento del precio del artículo, a pesar de tratarse de una materia prima indispensable para la cultura nacional en la mejor de sus manifestaciones, como lo es la prensa diaria y periódica.

También deben ser reducidos los gravámenes a los papeles, cantones y cartulinas para obras, y los que castigan la tinta de imprenta y los tipos, a fin de que la producción nacional de libros pueda prescindir del extranjero, para su confección.

Y, por último, la partida 2553 de la tarifa de avalúos debe ser subdividida, estableciéndose varias categorías, de manera que la liberación de derechos sólo quede subsistente para las obras producidas por extranjeros y las revistas y diarios en general.

Con la reducción de los derechos a los materiales que se requieren para las impresiones, se reducirá, a la vez, considerablemente el costo de todas las obras de imprenta, de tal manera que el escritor nacional y el comerciante o industrial no se verá en la necesidad, por espíritu de economía, de entregar a la industria extranjera el trabajo que legítimamente pertenece a los establecimientos nacionales.

Por último, conviene hacer constar

que, a pesar de los elevados derechos en vigor para el papel de diarios, su importación se acrecienta mucho cada año: en 1910 su importación alcanzó a 23.602.091 kilogramos y en 1911 a 27.460.364, con aumento, en un solo año, de 3.858.273 kilogramos, lo que quiere decir que la renta aduanera no sería perjudicada.

—Lasa el proyecto a la comisión de presupuesto.

8

DEPARTAMENTO NACIONAL DEL TRABAJO

Sr. Presidente—Continúa la consideración del proyecto de ley sobre organización del departamento nacional del trabajo.

—En discusión el artículo 4.º

Sr. Pastor—Pido la palabra.

Hago moción para que el artículo que no se observe se dé por aprobado.

—Asentimiento.

Sr. Presidente—Habiendo asentimiento, así se hará.

Sr. Atencio—Pido la palabra.

Desearía que la secretaría diera lectura previamente del artículo tercero, para ver cómo ha quedado redactado.

—Se lee:

«El departamento establecerá un servicio de inspección y vigilancia directa y permanente en los establecimientos industriales y comerciales, a fin de velar por el cumplimiento de las leyes relativas al trabajo, en la Capital y territorios nacionales.»

Sr. Atencio—Me parece que la redacción tiene algún defecto. Sería mejor decir: «El departamento establecerá un servicio de inspección y vigilancia directa y permanente en los establecimientos industriales y comerciales en la Capital federal y territorios federales, a fin de velar, etc.»

Sr. Secretario Sorondo—Así se había puesto al principio, señor diputado; pero la honorable Cámara sancionó el artículo transportando el agregado al final.

Sr. Atencio—Pido la palabra.

Voy a proponer una reforma a este artículo 4.º, lo mismo que a algunos otros del proyecto. Se trata de indicaciones de detalle, y para tranquilidad de los señores diputados adelantaré que no van a determinar mayor debate.

Sin embargo, yo pienso que cuando se trata una ley de esta naturaleza, el debate no está nunca de más; y, consecuente con estas ideas, echo de menos, desde luego, la presencia de los ministros del Poder ejecutivo que debieran tomar parte en la discusión de esta ley.

Es posible que sea la primera vez, en el mundo, que, al discutirse una ley que crea el departamento o instituto del trabajo, esté ausente el Poder ejecutivo, cuando, precisamente, en todas partes, proyectos de esta índole han sido siempre propuestos por el Poder ejecutivo y defendidos, auspiciados y discutidos por el mismo en los parlamentarios.

Este proyecto ha sido iniciado en la Cámara; lo ha despachado la comisión; el ministro del interior, que es el que tiene a su cargo actualmente el departamento del trabajo, ha eludido intervenir en la discusión; el ministro de agricultura, al que la comisión daba intervención, y bajo cuya dirección ponía ese departamento, tampoco ha estado presente, ni hay posibilidad de que lo esté, porque no se halla en la Capital.

De manera que la Cámara va a sancionar esta ley sin el concurso que le sería más eficaz para que ella resultara en las mejores condiciones.

Propondría a la comisión que aceptara esta reforma en el artículo 4.º, que ya insinué en sesiones anteriores: suprimir, desde luego, las palabras «durante las horas destinadas al trabajo», a fin de que la presencia del inspector pueda verificarse en cualquier momento que éste lo estime conveniente, y que se agregue después de la palabra «industria»: «o comercio», para que un comerciante que hubiera de estar sujeto

a esta ley o a las leyes relacionadas con el trabajo que se dicten en el futuro, no pueda alegar que no le comprende la disposición porque se refiere sólo a industrias.

Entonces, el artículo diría: «Los inspectores del trabajo, debidamente autorizados, tienen derecho a penetrar en los locales donde se ejerza una industria o comercio. La negativa del patrón, etc.»

Sr. Bas—Pido la palabra.

Yo no soy el miembro informante de la comisión de legislación en este asunto; pero la ausencia del presidente de la comisión y del colega encargado de informar, me ha obligado en este caso—conociendo ya la modificación que iba a proponer el señor diputado por Buenos Aires—me ha obligado, decía, a consultar a los colegas de comisión. Hemos cambiado ideas sobre este asunto, y me han manifestado que no hay inconveniente en aceptar la modificación que el señor diputado propone.

En consecuencia, pido que se vote el artículo propuesto por la comisión, con la modificación del señor diputado.

Sr. Padilla (M. M.)—¿Con el agregado?

Sr. Bas—Sí, señor, con la modificación.

Sr. Gómez (C. F.)—Pido la palabra.

Yo voy a aceptar el agregado de la palabra *comercio*, pero de ninguna manera la supresión de la segunda parte, a que se refiere el señor diputado por Buenos Aires.

Entiendo que, tratándose de una excepción al principio de la inviolabilidad del domicilio, garantizado especialmente por la Constitución nacional, las excepciones que se hagan deben ser muy limitadas; de modo que, extender las facultades de la inspección de trabajo para penetrar en la casa de un industrial o de un comerciante a cualquier hora del día o de la noche, no me parece prudente. Entiendo, pues, que el despacho de la comisión, en esta parte, es lo correcto.

Pediría, entonces, que se votara el despacho de la comisión, y, en el caso de ser rechazado, que se vote la modificación propuesta por el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Atencio—Pido la palabra.

En la sesión anterior, señor presidente, cuando yo hice referencia a esta modificación, llamé la atención de la Cámara acerca del hecho de que entre el artículo 3.º y 4.º había una diferencia, siendo que se trataba de una sola y misma cosa, que los dos artículos venían a regir. No era conciliable, en mi sentir, lo establecido en el primero de estos artículos, diciendo que el departamento establecería un servicio de inspección y vigilancia *directo y permanente*, con lo que se consignaba en el artículo 4.º, limitando esa misma vigilancia e inspección *a ciertas horas del día o de la noche*, es decir, a aquellas horas en que se trabajara en los establecimientos que hubieran de ser inspeccionados.

Considero, pues, que, habiendo dejado la Cámara el artículo 3.º con la palabra *permanente*, para ser consecuente, necesita eliminar el párrafo cuya supresión yo he propuesto, porque de otra manera resultaría una incongruencia, pues se aplicaría en unos casos el artículo primero y se haría la inspección permanente, aplicándose en otros casos el artículo 4.º, con un alcance distinto.

En vista de estas razones, y habiéndose aceptado la indicación que yo he formulado, me parece que no puede haber inconveniente en que el proyecto sea sancionado en esa forma.

Esta es, por otra parte, la legislación universal. Donde quiera que existe una inspección, ya esté ella adherida al departamento del trabajo o esté separada, las leyes respectivas la facultan para ejercer sus funciones en todo momento, en el momento en que lo estime conveniente. Porque si fuera solamente en las horas oficialmente declaradas para el trabajo, desde luego podría ocurrir el hecho de que, trabajándose en otras horas—y es de presumir que nosotros vamos a tener en breve una ley que legisle las horas de trabajo—la inspección no se podría verificar, porque las horas oficiales del trabajo en las fábricas o en las casas de comercio, oficialmente declaradas, no lo facilitarían.

Por otra parte, tratándose de una institución de esta importancia, no es presumible que vaya a ejercitarse la

facultad en un sentido abusivo o, si se quiere, discrecional. Cuando la inspección vaya a una fábrica o a una casa de comercio en horas distintas a las del funcionamiento ordinario, será por un motivo bien fundado. Motivos fundados son los que determinan el allanamiento, actualmente, con objetos previstos por la ley.

Como pudiera ocurrir que esa intervención le fuera negada a la inspección por el propietario del establecimiento, la ley prevé el caso, en otro de los artículos, y faculta al departamento para requerir el allanamiento. De manera que siempre el industrial o comerciante, es decir, el particular, tiene esa defensa, ese amparo de su hogar, en el supuesto de que éste hubiera de primar sobre el interés legítimo de vigilar las condiciones del trabajo.

Sr. Padilla (M. M.)—Pido la palabra.

Yo estoy también en contra del agregado propuesto por el señor diputado por Buenos Aires. Creo que sancionando el artículo 4.º tal como lo propone la comisión, no existe ni puede existir ninguna incongruencia con relación a las disposiciones del artículo 3.º.

El artículo 3.º, cuando habla de inspección y vigilancia *directa y permanente*, no quiere decir que ella sea de todos los momentos, de todas las horas. Lo que quiere decir es, sencillamente, que se habrá habilitado una inspección con carácter de estabilidad, para que la vigilancia pueda ser directa, pero no en todas las horas del día o de la noche.

El agregado propuesto es absolutamente peligroso, y no conduce a nada. Es peligroso, porque el mismo artículo 4.º, en la segunda parte, establece penalidades para el patrón que se niegue a que penetre la inspección a media noche, por ejemplo. Basta la negativa para hacerlo caer en la pena establecida.

Lo que se pretende con el agregado...

Sr. Atencio—No es agregado; es supresión.

Sr. Padilla (M. M.)—Lo que se pretende con la supresión es sencillamente esto: que no puede hacerse trabajar el personal en horas fuera del término ordinario.

Yo creo que es un caso que no hay para qué entrar a legislar. Será el caso de denuncias que puedan hacerse, porque la ley no puede ir más allá. Para evitar ese peligro, que, en mi opinión, es bastante serio, vamos a consignar una facultad que es atentatoria de los principios constitucionales, que debemos salvar ante todo.

Por lo pronto, hay la penalidad, y hay también, puede decirse, la obligación del juez, solicitado por la inspección, de decretar el allanamiento de la casa. Es sabido, señor, que aun en los casos más delicados y graves, como en los de crímenes y delitos, hay sus horas para el allanamiento, a menos que sean muy excepcionales.

Esta es una facultad en absoluto discrecional. A las doce de la noche puede presentarse la inspección; si el patrón se opone, le aplican la multa, y todavía queda el recurso de ir al juez, para que dicte la orden de allanamiento.

Yo creo que estas cosas no deben hacerse, como creo que no debemos comprender en esas disposiciones a los establecimientos comerciales. Lo que se quiere proteger con esta ley es el trabajo industrial, propiamente. El comercio es un mecanismo delicado, que no es posible someter a estas facultades discrecionales para que una oficina averigüe si se trabaja tales o cuales horas.

Creo que debemos mantener en todo caso la situación creada por el artículo 4.º, sobre todo cuando no hay la incongruencia que se señala. En mi opinión, no existe.

He de votar, pues, porque se mantenga la prescripción del artículo 4.º, tal cual ha sido redactado.

Sr. Atencio—Pido la palabra.

Me parece que son más de efecto que de fondo los argumentos que ha hecho el señor diputado por Tucumán. Desde luego, observo que no se apercibe de que en el artículo 3.º se dice que esta vigilancia o inspección se verificará en los establecimientos industriales o comerciales, y no acepta, sin embargo que, en el artículo 4.º se ponga «industria y comercio», que es simplemente la repetición de a lo que en el artículo 3.º se hace referencia.

Pero no es eso sólo. En todas partes,

la inviolabilidad del domicilio está garantizada en la misma forma que en nuestro país, y, sin embargo, en todas partes donde están organizados los departamentos u oficinas del trabajo sobre la base de la existencia de la inspección, que es su resorte fundamental, la facultad de la inspección puede ejercitarse en cualquier momento. Se ha presumido en ese caso que en todos aquellos en que interviene el funcionario público, es decir, el Estado, que esa función no se va a ejercitar en una forma abusiva, por capricho, que no va a ir a una casa de comercio o a una fábrica a media noche, sin ningún motivo, a causar alarmas y a molestar a la gente sin motivo fundado.

Sr. Gómez (C. F.)—La corrección debe estar en la ley, y no en el procedimiento.

Sr. Atencio—Si admitiéramos esa interpretación, nos encontraríamos con lo siguiente: ¿qué habríamos realizado la sanción de una ley en gran parte imperfecta.

Yo no tengo, como dije desde el principio, mayor interés en que el artículo reformado fuera el 4.º. Había propuesto la cuestión en el sentido de que se reformara uno u otro. Propendía, con mis observaciones a que la ley fuera más completa, más clara, y a que pudiera realizarse el objetivo que se busca con ella en la forma más satisfactoria. Esto no lo vamos a conseguir si nos detenemos en detalles de esta naturaleza, que, como he dicho, son más de apariencia que de fondo.

Parecería, a juzgar por los argumentos del señor diputado por Tucumán, que la supresión de este párrafo del artículo vendría a comprometer nada menos que un principio consagrado por la Constitución.

No hay tal cosa, señor presidente. La oficina de inspección del trabajo va a intervenir en una casa de comercio o en una industria cuando haya un motivo fundado para que lo haga. Eso se va a establecer, por otra parte, en la reglamentación de la ley. La ley de trabajo italiana, por ejemplo, es una de las más completas que existen, está desdoblada en una serie de amplios decretos reglamentarios, que establecen todos

los detalles, en cierto modo, todas las minucias de estas cosas, para evitar el abuso del funcionario por una parte, pero también para evitar lo más fundamental: que se burle la ley.

Me parece, señor presidente, que estas razones son bastante para justificar la supresión que había propuesto, llevado solamente por el propósito de que la ley resulte mejor hecha, más práctica y más eficaz.

Sr. Rothe—Pido la palabra.

Por mi parte, señor presidente, no tendría inconveniente en votar el artículo tal cual lo ha propuesto la comisión con el agregado de la palabra «comercio», porque es indiscutible que las inspecciones pueden ser absolutamente necesarias en los establecimientos comerciales. Basta considerar el caso de que existen prohibiciones para el trabajo de las mujeres y de los niños, o para las mujeres en ciertas épocas y en cierto estado, y que es posible que se cometan infracciones a las disposiciones relativas a esos casos. Por consiguiente, la inspección debe rezar con toda clase de establecimientos.

Pero los argumentos aducidos por el señor diputado por Tucumán, así como los que aduce el señor diputado por Santa Fe, demuestran de una manera palmaria que no se puede confiar esta clase de atribuciones en forma tan amplia que quedaran suprimidas las restricciones establecidas en el artículo de la comisión.

Por lo demás, la argumentación hecha por el señor diputado por Buenos Aires carece en absoluto de base, por cuanto las infracciones a la ley pueden ser investigadas según las formas usuales, establecidas en el código de procedimientos en lo criminal. De ahí, entonces, que no exista el riesgo presumido por él, de que sea imposible a la inspección del trabajo averiguar las infracciones que puedan cometerse.

Por consiguiente, votaré en contra del artículo propuesto por el señor diputado por Buenos Aires y en favor del de la comisión con el agregado de la palabra «comercio».

Sr. Presidente—Se va a votar el artículo con las modificaciones propuestas por el señor diputado por Buenos Aires

y aceptadas por la mayoría de la comisión.

Sírvase leer el señor secretario la forma cómo queda el artículo.

Sr. Gómez (C. F.)—Yo desearía saber si se va a votar el artículo con las palabras «durante las horas destinadas al trabajo».

Sr. Presidente—El artículo se va a votar íntegramente, puesto que no se ha hecho indicación para que se vote por partes.

Sr. Etcheverry—Yo entiendo que la comisión ha aceptado el agregado de la palabra «comercio».

Sr. Padilla (M. M.)—Podría votarse por partes.

Sr. Atencio—La comisión ha aceptado la fórmula que yo he propuesto.

Sr. Padilla (M. M.)—Eso no quiere decir que no se pueda votar por partes el artículo. Lo que correspondería es votar primero hasta las palabras «industria o comercio», y después, como segunda parte, las palabras «durante las horas destinadas al trabajo» cuya supresión solicita el señor diputado por Buenos Aires.

—Apoyado.

Sr. Presidente—Se va a votar la primera parte.

Sírvase leerla el señor secretario.

—El señor secretario Sorondo lee:

«Los inspectores del trabajo debidamente autorizados, tienen derecho a penetrar en los locales donde se ejerza una industria o comercio»...

—Se vota, y resulta afirmativa.

Sr. Presidente—Ahora corresponde votar la segunda parte.

—El señor secretario Sorondo lee:

«La negativa del patrón importará una infracción a esta ley, que se penará con multa de cien a quinientos pesos, sin perjuicio de proceder al allanamiento, previa orden requerida por el presidente del departamento.»

Sr. Padilla (M. M.)—¿Qué es lo que se va a votar?

Sr. Presidente—La segunda parte, que acaba de leerse.

Sr. Padilla (M. M.)—¿Y las palabras «durante las horas de trabajo»?

Sr. Presidente—Esa parte ha sido suprimida.

Sr. Padilla (M. M.)—No, señor presidente; yo creo que deben votarse esas palabras, como segunda parte.

Sr. Cantilo—Lo que corresponde es votar si se acepta o no la supresión de esas palabras.

Sr. Atencio—Si se aprueba el artículo tal como la comisión lo ha aceptado.

Sr. Gómez (C. F.)—Debe votarse si se acepta la supresión propuesta por el señor diputado por Buenos Aires y aceptada por la comisión.

Sr. Carbó—Pido la palabra.

Para manifestar que el despacho de la comisión, no lo puede ésta retirar sin el permiso de la Cámara. De manera que si hay un diputado que pide que se vote el despacho primitivo, tal como lo presentó la comisión, lo que corresponde es, votada ya la primera parte, que se vote ahora como segunda parte esas palabras contenidas en el primitivo despacho, en manera alguna si se acepta o no la supresión.

Sr. Palacios—Que se vote la segunda parte del artículo del despacho.

Sr. Presidente—Se va a votar la segunda parte.

—El señor secretario Sorondo lee:

«Durante las horas destinadas al trabajo».

—Se vota, y resulta afirmativa de 41 votos.

—En seguida se aprueba el final del artículo, quedando éste sancionado en los siguientes términos:

«Los inspectores del trabajo, debidamente autorizados, tienen derecho a penetrar en los locales donde se ejerza una industria o comercio, durante las horas destinadas al trabajo. La negativa del patrón importará una infracción a esta ley, que se penará con multa de cien a quinientos pesos, sin perjuicio de procederse al allanamiento, previa orden requerida por el presidente del departamento.»

—Se da por aprobado el artículo 5.º

—En discusión el artículo 6.º

Sr. Bas—Pido la palabra.

Al formularse este despacho, manifesté mi disidencia en el seno de la comisión, respecto de la parte del artículo 6.º en que establece que el presidente del departamento nacional del trabajo será nombrado *con acuerdo del Senado*.

No voy a hacer una discusión, sino simplemente a consignar el fundamento de esa disidencia.

Sería largo entrar a demostrar aquí el error de concepto de los que piensan que distribuyendo entre muchos funcionarios la responsabilidad se mejora la calidad de los nombramientos, a los fines de la administración; y me basta hacer presente que la disposición del artículo 6.º, por más que esté consignada en muchas leyes dictadas por este Congreso, es abiertamente contraria a un precepto de la Constitución nacional; y opino que es ya tiempo de que el legislador se amolde a sus principios, prescindiendo del concepto individual que se pueda tener sobre las ventajas o inconvenientes de las disposiciones constitucionales, a los fines para que han sido consagrados.

Me limitaré, a este efecto, a recordar el inciso 10 del artículo 86 de la carta fundamental, según el que es atribución del Poder ejecutivo la de nombrar y remover a los ministros plenipotenciarios y encargados de negocios, con acuerdo del Senado, y *por sí solo* nombrar y remover los ministros del despacho, los oficiales de sus secretarías, los agentes consulares y demás empleados de la administración cuyo nombramiento no está reglado de otra manera *por la Constitución*. No dice en ninguna parte: «por las leyes del Congreso».

Celoso como el que más de las prerrogativas del Congreso, que he de sostener en todo momento, pienso que la forma de tener derecho para hablar con autoridad sobre ellas es repitiendo las prerrogativas y las facultades de los demás poderes; y esta consideración es la que me determina a consignar los motivos de mi disidencia, que, como digo, no se refiere sólo a este caso, sino a todos aquellos en que el legislador, a mi juicio, erróneamente, ha vulnerado facultades del Poder ejecutivo, exigiendo acuerdo del Senado para el nombra-

miento de funcionarios de la administración que la Constitución no determina.

Por consiguiente, pido que, en caso de no ser aceptado el artículo en la forma despachada por la comisión, se vote estableciendo que el departamento nacional del trabajo estará bajo la dirección de un presidente nombrado por el Poder ejecutivo.

Sr. Agote—Creo que se puede suprimir todo el artículo.

Sr. Palacios—No se puede suprimir.

Sr. Padilla (M. M.)—Habría también que suprimir el término de duración del empleo.

Sr. Cafferata—Pido la palabra.

El señor diputado por Córdoba se ha adelantado a hacer las observaciones que yo iba a formular a este artículo, de manera que no tengo nada que agregar, y dejo constancia, únicamente, de mi opinión de que no es necesario el acuerdo del Senado, por las mismas razones que ha expuesto mi distinguido colega el señor diputado Bas.

Sr. Palacios—Se podría votar por partes.

Sr. Atencio—Tengo que proponer la reforma del artículo 6.º, no por las razones que ha dado el señor miembro informante...

Sr. Bas—Yo no soy miembro informante.

Sr. Atencio—... sino por otras.

No es, tampoco, que yo esté distante de aceptar la doctrina del señor miembro informante en cuanto se refiere a este punto, regido por la Constitución nacional. Pero no es propiamente a eso a lo que va a dirigirse mi proposición.

Pienso que conviene que el departamento del trabajo tenga un consejo superior, y que no esté dirigido únicamente por un presidente, como lo propone la comisión.

El proyecto originario, que ha servido de base al despacho en discusión, creaba un consejo, si bien en una forma distinta de la que voy a someter a la consideración de la Cámara. Pero más que ese antecedente, me ha servido de base, para la reforma, el hecho de que estas reparticiones en todas partes están dirigidas en idéntica forma, porque me ha parecido que, tratándose de or-

ganismos que, por fortuna nuestra, venimos a adoptar después de la larga experiencia a que han estado sometidos en las naciones más adelantadas de Europa y en los Estados Unidos de América, hay verdadera conveniencia en que no nos apartemos del molde experimental cuya eficacia se ha sentido y evidenciado, para adoptar un sistema distinto, que no ha sido suficientemente ensayado, o si lo ha sido, ha habido que reaccionar contra él.

Por estas razones, hubiera deseado yo que en la colaboración de esta ley hubiéramos contado con el concurso del Poder ejecutivo. Es cierto que los miembros de la Cámara tienen el deber de ocuparse de estas cuestiones; pero, por mucho que sea su celo y consagración, nunca pueden hacerlo con tanto interés y amor como aquellos que tienen particular predilección por esos estudios y, sobre todo, por los que tienen obligaciones de cierta índole, como los señores miembros del Poder ejecutivo.

Decía, señor presidente, que la forma a que aludo ha sido aceptada en todas las naciones, con la sola excepción, me parece, del departamento federal del trabajo de los Estados Unidos; y la razón de que en aquella república no existe ese consejo, es de la misma índole de aquella que mencioné en la sesión pasada para que ese departamento sea distinto de los que tienen naciones con diverso régimen de gobierno.

Este argumento parecería, en cierto modo, contrario a mi tesis, puesto que debiéramos aceptar con preferencia, dado nuestro sistema de gobierno, el modelo de los Estados Unidos, y no el de las naciones de régimen centralista. Pero es que, si bien el departamento federal de trabajo americano tiene sólo un presidente o comisario, en los departamentos locales, que según el concepto de los que estudian estas cosas son más perfectos en su organización, existe el consejo.

Voy, pues, a proponer la creación del consejo en una forma diversa a la que proyectó el autor de la ley, y que es, a mi juicio, más adecuada y, sin duda, más económica. Lo compondrían, además del presidente, cuatro vocales, altos funcionarios de la administración,

cuya sola enunciación los presenta, desde luego, como sumamente preparados para intervenir en esta clase de estudios.

Estos funcionarios serían: el director general de agricultura, el director de estadística y economía rural del departamento de agricultura, el director general de estadística y el director general de comercio e industrias. Basta enunciar la función que desempeñan estos altos empleados para comprender que se vinculan perfectamente a esta clase de organización que estamos examinando. Los cuatro dependen del ministerio de agricultura, que, en mi concepto, debería ser aquel del cual dependiera el departamento creado por esta ley.

Es cierto que la Cámara ha resuelto por una votación, que con gran pesar mío ha sido silenciosa, de que fuera al departamento del interior y no al de agricultura al que esto correspondiera; y digo que con pesar mío ha sido silenciosa, porque ésta ha sido una materia legislada en todas partes, y en todas partes ese punto ha dado lugar a extensos debates. Porque no es una cuestión baladí saber si el departamento del trabajo debe estar como dependencia en el ministerio del interior o en otro departamento del Poder ejecutivo.

Pero no creo que sea inconveniente el hecho de que la Cámara haya resuelto en la sesión anterior, al sancionar el artículo 1.º, que el departamento del trabajo esté en el ministerio del interior; no creo que sea un inconveniente el hecho de que se modifique el artículo 6.º en el sentido de que, al constituirse el consejo, éste se forme con altos funcionarios de la administración, que dependan de otro ministerio, porque, si bien es cierto que dependen de otro ministerio, no dependen de otro gobierno.

Yo propondría, entonces, y rogaría al señor secretario que tomara nota, el desdoblamiento del artículo 6.º en dos: creación de presidente y consejo, que sería regida por el primer artículo, y las funciones, que en el mismo artículo 6.º da la comisión al presidente; desdoblarlas, en el sentido de que las que

armonzaran con sus funciones, se las adjudicaran a él y las otras al consejo.

Si el señor secretario tiene la bondad de tomar nota, voy a dictar la redacción de esos artículos: «El departamento estará bajo la dirección de un presidente y un consejo, nombrado el primero por el Poder ejecutivo (yo proyectaba, tomando el espíritu del artículo de la comisión, establecer: «con acuerdo del Senado»). Pondrá así el señor secretario, pero yo no hago cuestión de eso «por el término de tres años» (me parece que conviene reducir el término de seis años que había proyectado la comisión, por razones que los señores diputados comprenderán, dado el plazo que tiene la existencia de cada poder en la administración) «nombrados, el primero por el Poder ejecutivo con acuerdo del Senado, por el término de tres años, y formado el segundo por los siguientes funcionarios: director general de estadística; director general de agricultura; director de estadística y economía rural del departamento de agricultura y el director general de comercio e industrias».

Antes de que tratemos este artículo, voy a permitirme decir cómo, en mi sentir, quedaría el resto del artículo 6.º de la comisión—7.º, por mi proyecto,—una vez que se atribuyeran al presidente y al consejo las distintas facultades.

Dice el proyecto de la comisión: «Serán funciones del mismo...»

Yo digo: «Serán funciones del presidente dirigir el cumplimiento de las leyes relativas al trabajo» (es lo mismo que la comisión proyecta) «proponer los nombramientos, ascensos, correcciones y separación de los empleados; reclamar, siempre que fuera necesario, la cooperación de las diferentes dependencias de la administración, estando éstas obligadas a prestársela; editar un boletín cuya distribución será gratuita a las asociaciones patronales y obreras».

«En caso de ausencia o impedimento del presidente, será reemplazado por el jefe de la división de legislación, y, en su defecto, por el funcionario que designe el Poder ejecutivo.» Agregando:

«Cuando el presidente falte, el consejo será presidido por el vicepresidente.»

Pero, como digo, el consejo, cuyo presidente será el del departamento del trabajo tendrá a su cargo la aplicación de la legislación del trabajo, la organización de la inspección, para la cual proyectará una reglamentación que aprobará el Poder ejecutivo, e interpondrá en los conflictos entre obreros y patrones, o entre el capital y el trabajo, en cualquiera de sus manifestaciones, como elemento de conciliación o tribunal de arbitraje. Su espíritu es el mismo que el del artículo de la comisión; solamente que, creándose el consejo, habrá que acordar a una y otra entidad las atribuciones que a cada una le corresponde.

Rogaría, pues, al señor presidente, que oportunamente pusiera en discusión la fórmula que propongo, y cuya lectura pido se sirva hacer el señor secretario.

Sr. Secretario Sorondo—(Leyendo): «El departamento del trabajo estará bajo la dirección de un presidente y de un consejo, nombrado el primero por el Poder ejecutivo, con acuerdo del Senado, por el término de tres años; y formado el segundo de los siguientes funcionarios: director general de estadística, director general de agricultura, director de estadística y economía rural del departamento de agricultura y director general de comercio e industria.»

Sr. Palacios—Pido la palabra.

La comisión de legislación mantiene el despacho en la forma ya conocida de los señores diputados, porque su redacción fué discutida amplia y reflexivamente por sus miembros.

Entiende la comisión, en cuyo nombre hablo, que la acción del departamento del trabajo debe ser rápida; que la institución que creamos por esta ley ha de caracterizarse por su unidad de pensamiento y dirección en todos los momentos, para que pueda intervenir eficazmente en los conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo. De eso, seguramente, dependerá su influencia.

Por otra parte, es bueno dejar constancia de que existe una experiencia dolorosa respecto de la participación de

distintos funcionarios de otras reparticiones en lo que respecta a las cuestiones obreras. Me refiero a la inspección que, por un decreto del Poder ejecutivo, fué confiada al presidente del consejo de higiene, al presidente del consejo general de educación, al jefe de policía y al intendente municipal, circunstancia que hizo imposible la realización de una obra útil, como he tenido oportunidad de demostrarlo ampliamente.

Así, los empleados a que se refiere el señor diputado, dificultarán la acción del departamento; serán un óbice a su labor y desvirtuarán, por lo tanto, el verdadero concepto de la institución.

Por estas razones, mantiene su despacho la comisión, y pide que se vote el artículo por partes, a objeto de salvar dificultades derivadas de la oposición que se ha hecho sobre la forma de nombrar al presidente.

Sr. Gómez (C. F.)—Pido la palabra.

Yo quiero dejar constancia de mi opinión del punto de vista del derecho constitucional, con referencia a las consideraciones que ha hecho el señor diputado por Córdoba, miembro de la comisión.

En mi concepto, no existen en la Constitución poderes absolutos, y la misma facultad que tiene el presidente de la República, de nombrar y remover a los empleados de la administración, está limitada, como las demás atribuciones de dicho funcionario, por las leyes reglamentarias que dicta el Congreso. Así, el artículo 14 de la Constitución nacional determina cuáles son los derechos de que disfrutaban todos los habitantes de la República, derechos más sagrados que las facultades que pone en mano del presidente de la República la misma Constitución, en lo que se refiere al nombramiento y remoción de los empleados públicos. Dice: «Todos los habitantes de la Nación, gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio», y entre otros de los derechos que enumera está la libertad de industria, la libertad de imprenta, etc., materias, todas, que pueden ser reglamentadas por el Congreso, como en efecto lo han sido. Y cuando, alguna vez, ante la suprema corte se han arguido de inconstitucionales las

leyes respectivas, aquel alto tribunal ha declarado que todas estas garantías constitucionales se entienden siempre sujetas a la reglamentación que dicte el Congreso en ejercicio de sus facultades.

Por otra parte, el inciso 28 del artículo 67 faculta al Congreso a hacer «todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes, antecedentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al gobierno de la Nación». Los precedentes legislativos y administrativos existentes en la República no autorizan la interpretación que ha dado a la Constitución, en mi sentir equivocada, el señor diputado por Córdoba.

Las leyes más fundamentales, relativas a grandes instituciones, han consignado diversas veces la facultad del Congreso de reglamentar en la ley el nombramiento de los funcionarios, hecho por el Poder ejecutivo; y los jurisconsultos que han ocupado la primera magistratura no han creído nunca afectadas por eso las facultades del Poder ejecutivo. En el Congreso se han sentadado también las eminencias más grandes y han votado esas leyes.

Yo quería salvar mi opinión, sin el propósito de hacer debate, porque me apercibo de que, realmente, los momentos son angustiosos, y la Cámara tiene muchos asuntos que tratar, me interesaba dejar constancia de esta opinión para manifestar que he de votar por el artículo, porque creo que esa forma de nombramiento es de buena administración y no repugna ni al espíritu ni a la letra de la Constitución que el presidente de la República busque el acuerdo del Senado para nombrar un funcionario de tanta importancia.

En cuanto a la última parte del artículo, como había observado ya, al leer el despacho de la comisión, el término de seis años fijado para la duración del presidente me parece excesivo.

No hay precedentes de que se haya votado un término tan largo para la duración de un empleado de este género. El presidente del Banco de la Nación dura cuatro años, el del Banco hipotecario dura el mismo tiempo y los directores duran menos.

Voy a proponer, pues, en su oportunidad, que se reduzca el término a cuatro años.

Por lo demás, refiriéndome a la proposición del señor diputado por Buenos Aires, diré que coincide en absoluto con las manifestaciones del señor diputado Palacios. Soy partidario de que la responsabilidad esté a cargo de una sola persona, pues distribuirla entre muchas no da resultado, ni aquí ni en ninguna parte. No se puede decir, siendo muchas, cuál es la persona responsable de las diversas orientaciones que se adoptan.

Por otra parte, la verdad es que organizado el departamento del trabajo en esta forma, y dependiendo del presidente de la República y del ministro del interior, serían éstos, en definitiva, los que en los grandes conflictos del trabajo fijarían los rumbos.

Creo, pues, que complicar eso con un consejo de cinco funcionarios, resultará altamente inconveniente.

Sr. Cantilo—Pido la palabra.

Estoy de acuerdo con el señor diputado por Santa Fe en cuanto se refiere al acuerdo necesario del Senado para nombramiento de presidente del departamento nacional del trabajo.

Deseo salvar mi opinión respecto al consejo del trabajo, que propuse en el proyecto que tuve el honor de presentar a la honorable Cámara y que ha dado origen al despacho de la comisión. De esta manera, soy consecuente con las ideas que sostuve en el seno de la misma cuando fui llamado para ser consultado sobre la modificación de algunos puntos del proyecto.

Sin embargo, señor presidente, no acepto la proposición hecha por el señor diputado por Buenos Aires respecto a los funcionarios que, a su juicio, deben constituir el consejo.

El señor diputado por Buenos Aires ha olvidado, me parece, que, a consecuencia de una votación anterior, el departamento del trabajo depende del ministerio del interior. Los funcionarios del ministerio de agricultura no corresponden entonces, dentro de la nueva organización.

Por otra parte, yo entendí, al proponer el consejo, que era conveniente

rodear al departamento nacional del trabajo de toda la autoridad necesaria, que la dirección unipersonal tenía el grave inconveniente de entregar a una sola persona la resolución de asuntos de gran importancia y que en un momento dado podía afectar considerables intereses.

Dada la premura de tiempo, no demoraré más la atención de la honorable Cámara, ni haré otras consideraciones.

Mantengo los términos del artículo tal como figura en el proyecto original, porque creo en esa forma contribuir a la mejor solución de las dificultades del futuro.

Sr. Atencio—Pido la palabra.

He entrado a este debate, señor presidente, más libre acaso que cualquier otro de todo prejuicio, de toda idea de amor propio. Se trata de una materia de la mayor trascendencia para el país y que, por desgracia, comenzamos a estudiar con excesivo retardo, y he propendido y propendo puramente a lograr que la ley que sanciona la Cámara sea lo más eficaz posible. Para determinar y precisar esto con toda eficacia, yo tengo que referirme a los institutos y a los organismos de esta índole que existen en otros países del mundo, por la razón de que nosotros no los tenemos.

Siento que el señor miembro informante, autor de uno de los dos proyectos que, refundidos en uno, han dado por resultado el despacho de la comisión, siento, digo, que el señor diputado por la Capital, doctor Palacios al expresar su disidencia con la forma propuesta por mí para la dirección de este instituto, no haya profundizado el tema, como él tiene, indudablemente, capacidad para hacerlo...

Sr. Palacios—No he profundizado porque corremos el peligro, si hacemos un gran debate, de no sancionar la ley, señor diputado.

Sr. Atencio—Es posible, señor presidente. Si yo pudiera armonizar mi criterio con el del señor diputado sobre lo que yo entiendo la mejor redacción y la mayor eficacia de la ley, y la necesidad, que también encuentro existe, de sancionarlo inmediatamente, lo haría con mucho gusto. Pero yo he disen-

tido y disiento con el criterio del señor diputado, y prefiero que, aun cuando la ley se demore un poco más—que al fin y al cabo sólo serían algunas horas—resulte lo más completa y lo más perfecta posible.

Decía, señor presidente, que siento, porque el señor diputado ha aludido a inconvenientes que tiene la inspección encargada aquí, entre nosotros, a diferentes autoridades: la policía, el departamento de higiene, la municipalidad, etcétera, etc. En efecto, señor presidente, esta pluralidad de inspecciones ofrece un gravísimo inconveniente; pero esas no son la inspección del trabajo. Precisamente contra eso es contra lo que reacciona la ley.

Al crear el departamento del trabajo, se trata principalmente de dar existencia a la inspección, que es su eje central, que es su verdadera fuerza, que es la que constituirá su verdadera eficacia. ¿Qué razón tendría, creado el departamento del trabajo, la intervención del departamento de higiene, o de la policía, o de cualquiera otra repartición, para ir a hacer esta fiscalización?

Además, su intervención no era de esa naturaleza, no era de esa índole, era de otra muy distinta: era de carácter policial en unos casos, de carácter sanitario en otros.

Pero es que no estamos proyectando ahora una ley de policía, ni una ley de higiene, sino una ley del trabajo; y esta ley del trabajo tiene que calcarse sobre las que ya existen en los países más adelantados, porque nosotros no podemos tener la pretensión de innovar y perfeccionar instituciones de las que no tenemos ni base ni antecedentes.

Sr. Palacios—¿Me permite el señor diputado?

Sr. Atencio—Sí, señor.

Sr. Palacios—Me he referido simplemente a la difusión de las responsabilidades, y he hecho notar que sólo de la unidad de acción y de pensamiento podrá derivarse la eficacia de la institución... Pero... perdóneme el señor diputado, si lo interrumpo en su interesante discurso. Si el debate continúa en esta forma, es muy posible que nos quedemos sin quórum, y sólo faltan dos

sesiones para que la Cámara dé por terminado su trabajo. ¿No cree, entonces, el señor diputado que si no sintetizamos nos quedaremos sin ley?

Su sanción responde a un clamor público. El país exige una ley orgánica del departamento del trabajo, que ha de tener una influencia apreciable en los movimientos obreros...

Disculpe el señor diputado si le hago esta observación, animado del propósito de que el proyecto se sancione.

Sr. Atencio—Había venido animado con la ilusión de que íbamos a examinar detenidamente, como en mi concepto lo imponen las exigencias de la cultura pública, una verdadera ley del trabajo. Pero como estamos bajo la presión de la hora y del quórum y no quiero yo tampoco que la ley se demore, porque tengo verdadero interés en que terminemos este asunto, renuncio a todas mis observaciones y acepto plenamente el despacho de la comisión.

Sr. Palacios—¡Muchas gracias!

Sr. Padilla (M. M.)—Pido la palabra.

Yo deseo, señor presidente, además de manifestar mi conformidad con lo expresado por el señor diputado Bas respecto del primer párrafo del artículo en discusión, preguntar a la comisión cuál es el verdadero alcance, para determinar la eficacia de la ley, de los términos «intervenir en los conflictos entre el capital y trabajo», entendiendo, naturalmente, que se refiere a la Capital federal y a los territorios nacionales.

Como la palabra «intervención» es elástica, yo desearía saber con precisión cuál será el alcance que ha de dársele.

Sr. Bas—A los efectos de los artículos 5.º y 6.º de la Constitución... (Risas.)

Sr. Padilla (M. M.)—Entonces, si es con ese concepto, yo tendré que votar en contra.

Sr. Etcheverry—Pido la palabra.

Del artículo 1.º del proyecto, ya aprobado, se deduce que el departamento del trabajo va a ser una repartición dependiente directamente del ministerio del interior, con atribuciones determinadas. En consecuencia, desearía saber de la comisión si no le parece conveniente cambiar la designación del jefe del

departamento, pues no me explico que pueda haber presidente en una repartición que va a depender del ministerio y que no tiene comisión alguna que presidir.

Sr. Cantilo—Suprimido el consejo, no tiene razón de ser.

Sr. Etcheverry—Me parece que más propio sería que en vez de «presidente» se dijera «director general».

Sr. Escobar—Por el artículo 7.º debe presidir los consejos del trabajo.

Sr. Etcheverry—Puede presidir lo mismo.

Sr. Palacios—No tiene importancia, señor diputado.

Sr. Presidente—La comisión ¿acepta la modificación?

Sr. Palacios—Mantiene el despacho, porque entiende que carece de importancia la observación del señor diputado.

Sr. Etcheverry—Yo creo que tiene importancia.

Sr. Agote—Según la clasificación del presupuesto, corresponde que sea «director».

Sr. Palacios—No se trata de una oficina, sino de una repartición autónoma.

Sr. Padilla (M. M.)—Señor presidente: estoy esperando todavía una contestación de la comisión, porque la broma del señor diputado Bas ya ha pasado.

Quiero saber cuál es el verdadero alcance de los términos «intervenir en los conflictos entre capital y trabajo».

Sr. Palacios—Interviene amistosamente, con el objeto de solucionarlos. Es eso, sencillamente.

Sr. Padilla (M. M.)—Pero hay intervención de muchas clases, y es necesario precisar. Porque intervenir sólo para que le lleguen las quejas de uno y otro lado...

Sr. Escobar—Si el señor diputado se toma la pena de leer el artículo 7.º encontrará ampliamente explicado el concepto de la intervención del presidente del departamento del trabajo.

Sr. Padilla (M. M.)—Yo no lo he podido encontrar; por eso pregunto a la comisión. Pero resulta que no se me saca de la duda. Si el señor diputado Escobar quiere tomarse la molestia de explicarme el caso...

Sr. Escobar — El artículo 7.º indica claramente que el presidente del departamento del trabajo interviene amistosamente en los conflictos que se le presenten a objeto de solucionarlos.

Sr. García González — Pido la palabra.

Sr. Padilla (M. M.) — Yo no veo absolutamente nada de esas cosas.

Hay otro punto, además...

Sr. Palacios — Voy a explicar.

Sr. Presidente — Perdóneme el señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Padilla (M. M.) — Hay, además, otro punto que dice: «Reclamar, siempre que fuera necesaria, la cooperación de las diferentes dependencias de la administración, estando éstas obligadas a prestarla». ¿Se refiere esencialmente a la administración nacional?

Sr. Palacios — Es claro.

Sr. Padilla (M. M.) — Es que no es muy claro.

Sr. Palacios — No hay inconveniente ninguno por parte de la comisión en aclarar más el concepto, si así lo desea el señor diputado; pero ella entiende que el despacho no ofrece ninguna dificultad de comprensión.

El presidente del departamento interviendrá amistosamente en todos los conflictos que se presenten entre patrones y obreros, ofreciéndose como árbitro para solucionarlos de la mejor manera.

Además, de acuerdo con el artículo 7.º, tiene la facultad de convocar y presidir, cuando lo juzgue conveniente, un consejo de trabajo formado de patrones y obreros, que discutirán sus intereses con el propósito de arribar a un arreglo.

La intervención, pues, es exclusivamente amistosa. Ahora, por lo que se refiere a la cooperación que deben prestar al departamento del trabajo, las diversas reparticiones, es evidente que ellas son las de la administración nacional.

Sr. Padilla (M. M.) — De manera que la situación es simplemente la de un mediador; no hay obligación, absolutamente.

Sr. Palacios — Absolutamente no, porque eso requeriría una ley especial de arbitraje obligatorio, que no ha sido nuestro propósito proponer.

Sr. Padilla (M. M.) — Precisamente. Pero la intervención a que aludía el señor diputado Bas, llega más allá.

Sr. Palacios — A la que he enunciado se refiere el artículo; y ese es el criterio de la comisión, en cuyo nombre hablo.

Sr. Presidente — Había pedido la palabra el señor diputado García González.

Sr. García González — Voy a decir dos. Creo que, si hay quórum, entraremos a votar este artículo 6.º, que ha motivado una larga discusión. Su primera parte entraña, en mi concepto, un punto constitucional grave, a saber: si la resolución de la Cámara, a título de reglamentar, como se ha dicho, esta ley, va o no a violar la Constitución, o los preceptos que establecen las facultades del presidente de la República.

La premura del tiempo nos obliga a ser parcos en la enunciaci6n de las razones que motivan nuestro voto. Al fundarlo, declaro que creo que una disposici6n semejante serí violatoria de la Constitución. Nuestro régimen constitucional permite el desenvolvimiento de los respectivos poderes sin vinculaciones de otro orden que aquellas que expresa y taxativamente se determina respecto de un poder para con otro. No existen, en nuestro régimen constitucional, sistema parlamentario para la marcha y ejercicio de las atribuciones del Poder ejecutivo. Es por esto que, cuando la Constitución establece que el presidente de la República ha de nombrar por sí solo los empleados de la administración, no puede requerir la participaci6n de otra rama—el poder legislativo en este caso—sino cuando de una manera expresa así se establece.

La invocaci6n que se ha hecho, respecto de que un precepto de la Constitución obliga al Congreso a dictar leyes que reglamenten el ejercicio de los poderes actuales, y de los antecedentes de la Constitución, nunca puede servir para interpretarla y decidir en el concepto de que sea necesario el acuerdo del Senado. La Constitución, que en este caso establece las facultades del presidente de la República, no habla del Poder ejecutivo, y ha determinado que este funcionario tenga su libertad de acci6n para hacer los nombramientos sin acuerdo del Senado.

En este concepto, mi voto será contrario al despacho de la comisión.

Nada más.

Sr. Presidente—Se votará por partes el artículo propuesto por la comisión. Entiende la presidencia que debe votarse en tres partes.

Sr. Palacios—La primera sería ésta: «El departamento estará bajo la dirección de un presidente».

Sr. Agote—El señor diputado Etcheverry propone un «director».

Sr. Presidente—Pero la comisión no acepta. Se tiene que votar primero el despacho de la comisión.

Sr. Palacios—Debe votarse primero el despacho de la comisión y, sólo en caso de ser rechazado, votarse lo que propone el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Agote—Para votar por partes no se necesita una votación previa en general del artículo. De manera que sería: «El departamento estará bajo la dirección de un», y se votaría, después, respecto de la palabra «presidente» o «director».

Sr. Palacios—¡No, señor diputado! ¡Se está dificultando la votación! Se trata de una cosa muy clara: hay que votar primero lo que determina el despacho de la comisión, que propone que el departamento estará bajo la dirección de un presidente. La otra proposición, de que haya de ser un director, vendrá después.

Sr. Agote—Debe votarse por partes, de acuerdo con el reglamento y la práctica establecida. Yo señalo hasta las palabras «de un», sin querer dificultar, señor presidente... y no explicaré, porque esas cosas no se explican.

Sr. Etcheverry—A mi vez, quiero hacer presente que al proponer la modificación del despacho de la comisión en el sentido de que sea un director en vez de un presidente, no lo he hecho con la idea de obstruccionar, todo lo contrario. Creo que tengo perfecto derecho para pedir que el artículo se vote por partes.

Sr. Palacios—Tiene derecho a pedir que se vote por partes; pero primero hay que votar la relativa al despacho de la comisión.

Sr. Etcheverry—Entonces que se vote por partes.

Sr. Palacios—Me parece que el señor diputado no ha de pretender que se vote primero su proposición.

Sr. Presidente—Se va a votar por partes.

Sírvase leer el señor secretario.

—El señor secretario Sorondo lee:

«El departamento estará bajo la dirección de un»...

Sr. Palacios—¡Nó, señor presidente! ¡Es un absurdo sencillamente, votar en esa forma! No podemos admitir que se vote: «bajo la dirección de un», porque eso no significa nada. ¡Son palabras que no involucran ningún concepto!

Sr. Gómez (C. F.)—No hay dificultad en votar la palabra «presidente». El que no esté conforme, que vote en contra.

Sr. Agote—Entonces aparecería que estamos votando en contra de «El departamento bajo la dirección de un presidente, etc.»

Sr. Palacios—¡Pero si se tiene que decir bajo la dirección de quién!

Sr. Presidente—El señor diputado por Buenos Aires ha retirado su indicación.

Sr. Agote—Pido la palabra.

Apelaré a los recuerdos de la Cámara. Se ha tratado y se ha votado aquí—la secretaría puede informarnos en este caso— en diversas ocasiones, artículos fraccionados en partes y en que la votación se ha hecho hasta la palabra «y» como ocurrió en la ley de las avenidas por ejemplo.

Sr. Palacios—Es otro caso absolutamente distinto, porque la partícula «y», cambiaba por completo el concepto.

Sr. Agote—Ruego a la presidencia me haga respetar en el uso de la palabra. Parecería, señor presidente, que los que debieran estar más interesados en no demorar la sanción de la ley son precisamente los que más me interrumpen...

Sr. Gómez (C. F.)—Pero lo que podría pedir el señor diputado es que se vote por partes, solicitando que se vote con una u otra denominación.

Sr. Presidente—Permítame el señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Agote—Se podría poner: «que estará bajo la dirección de un funcionario que llevará el nombre de...»

Sr. Palacios—De todas maneras, hay que votar por el nombre; primero, por «presidente», y después por «director».

Sr. Agote—Ruego a la presidencia haga leer el artículo del reglamento, para ver si tengo o no derecho de pedir que se vote por partes, hasta cualquier parte del artículo.

Sr. Presidente—Sírvese leer el señor secretario el artículo pertinente del reglamento.

—El señor secretario Sorondo lee:

«Artículo 160. Toda votación se contraerá a un solo y determinado artículo, proposición o período: mas cuando estos contengan varias ideas separables, se votará por partes, si así lo pidiera cualquier diputado.»

Sr. Palacios—Ideas; pero no palabras.

Sr. Agote—Por eso propongo que se vote: «bajo la dirección de un funcionario que llevará el nombre de».

Sr. Presidente—Eso no es parte; y, sobre todo, importaría una modificación al despacho de la comisión.

Se va a votar...

Sr. Palacios—Hasta las palabras «por el Poder ejecutivo».

Sr. Presidente—Sí, señor.

—El señor secretario Sorondo lee:

«El departamento estará bajo la dirección de un presidente nombrado por el Poder ejecutivo»...

—Se vota, y resulta afirmativa.

Sr. Presidente—Se va a leer la otra parte.

—El señor secretario Sorondo lee:

«con acuerdo del Senado de la Nación»...

—Se vota, y resulta negativa.

—El señor secretario Sorondo lee:

«por el término de seis años.»

—Se vota, y resulta negativa.

Sr. Escobar—Que se rectifique la votación.

—Rectificada la votación, resulta negativa contra 20 votos.

Sr. Agote—Es inútil esta parte. Desde que no hay acuerdo del Senado, no puede haber término.

Sr. Palacios—Está suprimido.

—Puesto a votación el segundo párrafo del artículo, dice el

Sr. Padilla (M. M.)—Propongo la substitución de la palabra *intervenir* por *mediar*.

Sr. Presidente—¿Acepta la comisión?

Sr. Escobar—Acepta.

—Se aprueba el segundo párrafo, quedando el artículo en la siguiente forma:

Art. 6.º El departamento estará bajo la dirección de un presidente nombrado por el Poder ejecutivo.

Serán funciones del mismo: Dirigir el cumplimiento de las leyes relativas al trabajo; mediar en los conflictos entre capital y trabajo; proponer los nombramientos, ascensos, correcciones y separación de los empleados; reclamar siempre que fuera necesario la cooperación de las diferentes dependencias de la administración, estando éstas obligadas a prestársela; editar un boletín cuya distribución será gratuita a las asociaciones patronales y obreras.

En caso de ausencia o impedimento del presidente, será reemplazado por el jefe de la división legislación, y en su defecto por el funcionario que designe el Poder ejecutivo.

—En discusión el artículo 7.º

Sr. Padilla (M. M.)—En este artículo también hay que ponerse: «mediación».

Sr. Palacios—Aceptado.

—Se aprueba el artículo en estos términos:

Art. 7.º El presidente, cuando lo requieran los conflictos entre capital y trabajo, convocará y presidirá «Consejos del trabajo» compuestos en cada caso con igual número de patrones y obreros. Estos consejos tendrán durante su funcionamiento a su disposición todos los elementos de estudio necesarios para sus resoluciones y éstas pondrán término a la mediación del departamento en el caso sometido a su decisión.

—En discusión el artículo 8.º

Sr. Agote—Hago moción para que se suprima este artículo. Creo que es contrario a todo principio de derecho, porque nadie está obligado, ni por la ley, ni por ninguna causa, a suministrar informes sino en los casos de tratarse de actos castigados por el código penal.

Sr. Palacios—¡Pero si esto es la ley que lo obliga!

Sr. Agote—Creo que, en los conflictos entre los obreros y los patronos, la ley da al departamento los medios de conseguir los informes necesarios, sin necesidad de imponerlo como una carga pública. Por esto soy contrario al artículo.

Sr. Padilla (M. M.)—Yo creo que habiéndose puesto «mediación», en vez de «intervención», no resulta muy justificada esta obligación de suministrar datos.

Sr. Palacios—Es para hacer eficaz la acción del departamento.

Interesa a todos la exactitud de los datos que se obtengan, porque sólo así será posible encarar con criterio científico las graves cuestiones de política obrera que se presentan en el país. No podemos quedar librados a la buena fe de los que han de suministrar antecedentes.

Es la práctica, por otra parte, que se observa entre nosotros en lo que se refiere a estadística, y es la práctica universal. De otra manera, los intereses pequeños de los industriales dificultarían o harían imposible la acción del departamento.

Sr. Padilla (M. M.)—Es demasiado absoluta la forma en que está redactado el artículo.

Sr. Anchorena—Pido la palabra.

Es para hacer una aclaración, que seguramente va a aceptar el señor diputado.

Sr. Padilla (M. M.)—Siendo así, le cedo la palabra.

Sr. Anchorena—Se trata de una ley que va a regir las relaciones entre obreros y patronos; entonces, donde el artículo dice «Toda persona que rehúse», etc., podría decirse: «Todas las personas a que se refiere esta ley, que rehúsen», etc.

Sr. Palacios—Eso es lo que proponemos.

Sr. Agote—Este artículo contraría el principio de que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo.

—Se lee:

Art. 8.º Todas las personas a que se refiere esta ley, que rehúsen suministrar datos o informes requeridos por el departamento para el desempeño de su cometido, o los suministre con falsedad, incurrirá en una multa de 100 a 150 pesos por la primera vez y de 500 a 1.000 pesos en caso de reincidencia, a beneficio del tesoro común de las escuelas, o en su defecto sufrirá el arresto equivalente según el Código penal.

El departamento no podrá comunicar ni publicar los nombres de las personas, empresas o sociedades a que se refieren los datos e informes. Todo empleado o agente del departamento nacional del trabajo que revele los secretos industriales o comerciales de que hubiere tenido conocimiento en razón de su cargo, incurrirá en la pena establecida en el Código penal por la revelación de secretos.

Sr. Agote—Podría presentarse el caso de verse obligada una persona a declarar contra sí mismo, según el texto de esta ley, en un conflicto entre obreros y patronos.

Varios señores diputados—¡No! ¡No!

Sr. Sánchez Viamonte—¿Quién va a aplicar esta multa, y por qué vías se hará efectiva? Encuentro un peligro en que no se establezca, y desearía que el punto se aclarase de una manera expresa.

Sr. Palacios—Las multas serán aplicadas por el departamento del trabajo, lo que no es una novedad, pues la defensa agrícola, señor diputado, también las aplica.

Sr. Gómez (C. F.)—Pero hay apelación ante la justicia federal.

Sr. Palacios—Muy bien; propongo un agregado, determinando que las multas serán fijadas por el departamento, con apelación ante la justicia ordinaria.

Sr. Jaramillo—Pido la palabra.

En el artículo 4.º hemos sancionado también una multa. De manera que podría determinarse en un artículo por separado la autoridad que ha de aplicar esas multas y las que prescribe el artículo en cuestión, así como el tribunal de apelación.

Sr. Palacios—Entonces, será mejor agregar un artículo al fin de la ley, más o menos en estos términos: «Las penas a que se refieren los artículos 4.º y 8.º serán aplicadas por el departamento del trabajo, con apelación ante la justicia ordinaria.

Que se vote primero el artículo con la modificación propuesta por el señor diputado Anchorena y aceptada por la comisión.

Sr. Presidente—Se votará el artículo en la forma indicada.

—Es aprobado, así como los artículos 9.º y 10.

Sr. Secretario Sorondo—Como artículo 11, viene el siguiente, propuesto por el señor diputado Palacios: «Las penas a que se refieren los artículos 4.º y 8.º serán aplicadas por el departamento del trabajo con apelación a la justicia ordinaria».

—Sin observación se aprueba el artículo leído.

—El artículo siguiente es de forma.

Sr. Presidente—Queda sancionado.

9

MOCIONES

Sr. Rothe—Quedó ayer sin votarse, la moción del señor diputado Cantilo sobre el despacho de la comisión de agricultura relativa a la compra de la isla de los Estados. Como la sesión ha continuado, me parece que corresponde votarla.

Sr. Presidente—Pero la Cámara ha resuelto tratar en seguida del asunto que acaba de sancionar, el referente a la moción hecha por el señor diputado Saavedra Lamas.

Sr. Del Barco—Pido la palabra.

Yo, en general, soy contrario a las preferencias, y he protestado más de una vez contra ellas. Pero ya que todo el mundo hace mociones de preferencia, yo pido a la honorable Cámara que tenga la benevolencia de concederme una, que considero muy justa.

En la orden del día número 15, figura un despacho de la comisión de guerra, asunto en revisión del honorable Senado, mandando abonar a distinguidos militares una obra realizada por encargo del gobierno, los que desde el año pasado gestionan que este proyecto se convierta en ley.

El señor diputado del Valle, presidente de la comisión de guerra, podrá dar todos los antecedentes relativos al asunto.

Pido, entonces, que, en el orden de las preferencias establecidas, se vote este asunto, que ya tiene sanción del honorable Senado.

Sr. Agote—Pido la palabra.

Yo me voy a permitir también hacer moción de preferencia en el orden de las ya establecidas, para un asunto de orden público y del mayor interés, que debió ser tratado por la honorable Cámara hace varios días, y que fué, por pedido de no recuerdo qué diputado, dejado para la sesión subsiguiente. Me refiero al proyecto de ley sobre el servicio radiotelegráfico de la República, cuya importancia no creo necesario demostrar, y que se encuentra en la orden del día número 12, con despacho de comisión, cuando ya hemos tratado asuntos de la orden del día número 15.

Es un asunto de orden público, importantísimo, y que tiene esta razón de urgencia: que para llevar a cabo las instalaciones se necesita aprovechar la época favorable, que es el verano. Si no se hacen en esta época, no se podrán establecer las estaciones radiotelegráficas que el país necesita en el sur para el servicio y seguridad de sus costas.

—Apoyado.

Sr. Presidente—En primer término, se va a votar la indicación del señor diputado Rothe, relativa a la moción que quedó pendiente sobre el proyecto de compra de la isla de los Estados: en seguida, la del señor diputado por Córdoba, doctor Del Barco, y, después la del señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Mora y Araujo—Pido la palabra. ¿En qué ha quedado, señor presidente, la resolución de la Cámara de tratar